



19 OCTUBRE, 2022

Ciudadanía digital, desinformación y calidad de la democracia

CARLOS DOMÍNGUEZ AVILA

La ciudadanía digital es un concepto emergente, un tanto ambiguo y vinculado a los derechos ciudadanos en el mundo virtual, en la sociedad del conocimiento, en Internet y en las redes so conocida como ciberciudadanía o e-ciudadanía, examina las competencias digitales imprescindibles para acceder de manera segura y efectiva a la información que esté disponible en línea como para participar en comunidades virtuales y presenciales.

Es incuestionable la relevancia de una ciudadanía digital ante una producción proactiva, veraz y responsable de contenido, de un lado, y un consumo consciente y responsable de contenidos, de otro. En contraposición, se entiende que una sociedad madura no puede ser plenamente libre ni democrática.

La ciudadanía digital está directamente relacionada con otros principios y valores. Desde la libertad de expresión (prensa y emisión del pensamiento), la defensa del interés público y del bien común, las dimensiones fundamentales de la democracia como la rendición de cuentas interinstitucional, la transparencia, la libertad, la competencia, la participación (deliberación) y la igualdad/solidaridad.

En términos analíticos, la ciudadanía digital se localizaría en la intersección entre la libertad de expresión pública (política) y democracia. Y es primordial en la sociedad de la información en lo concerniente a la inclusión (alfabetización digital), derechos y deberes de los usuarios en Internet, e-gobierno, ciberactivismo, comportamiento tecnológico adecuado, responsabilidad y

Esto ha cobrado particular importancia ante el surgimiento y popularización en las últimas dos décadas de las redes sociales virtuales como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp o Telegram, que son utilizadas por una buena parte de los latinoamericanos.

Aunque no se puedan ni deban soslayar las contribuciones de dichas redes sociales ni del Internet contemporáneas, tampoco se debe desconocer la existencia de conductas irresponsables, intencionalmente premeditadas de ciertos actores. Esto comprende una amplia gama de acciones que incluyen el abuso de poder, la invasión de la vida privada, el crimen cibernético, la polarización, el fundamentalismo, la persecución de la disidencia en línea o la divulgación masiva del discurso de odio.

Más recientemente, sobre todo desde el escándalo de Cambridge Analytica, en 2018, las estrategias de desinformación o de diseminación de noticias fraudulentas o engañosas (*fake news*) cobró aún mayor relevancia. Actualmente se entiende que las estrategias de desinformación impactan en procesos de erosión de la confianza en numerosos países a escala global. Ello es reforzado, además, a través del uso de herramientas como la microfocalización o dirección de contenidos, *deep fake news*, manipulación de algoritmos y *astroturfing*, entre otros.

Las estrategias de desinformación generan impactos sociales espurios, ya que socavan la confianza institucional e interpersonal. Al mismo tiempo, dichas estrategias generan incertidumbre, alimentan la ingobernabilidad y la desafección, empobrecen la deliberación en el espacio público, refuerzan posturas sesgadas y radicales (incluyendo el discurso de odio, la discriminación y la digitalización de pro

racial, intergeneracional, geoespacial—), inducen a los usuarios al error y deterioran la cultura republicana.

En consecuencia, se viene denunciando insistentemente el extraordinario desafío que representan estrategias de desinformación tanto en democracias consolidadas como en democracias en trá

¿Qué (se puede) hacer para controlar y reducir la desinformación? Se sabe que la desinformación en períodos de campañas electorales, es una estrategia con antecedentes bastante antiguos y junto a la referida popularización de las redes sociales e Internet. Una vez confirmados sus efectos en la deliberación, el espacio público y el bien común, numerosas sociedades y Gobiernos han reorganizado y protegido y reforzado sus regímenes políticos.

En términos operativos, se han adoptado iniciativas como la promoción de la ciudadanía digital, la regulación sectorial o el monitoreo y verificación de los contenidos, hasta la represión y responsabilización de quienes directamente involucrados en la producción y divulgación de noticias fraudulentas, distorsionadas o criminales.

En el contexto de ese doble proceso de promoción de una ciudadanía digital y de represión de los numerosos actores podrían ser llamados a asumir responsabilidades, sobre todo en el caso de los intermediarios y distribuidores de informaciones engañosas. Y en ese ámbito, deberían intervenir las asociaciones de medios de comunicación, el mundo académico, las organizaciones de la sociedad civil, los legisladores, los órganos reguladores, las organizaciones internacionales, los sistemas educativos

La adopción de medidas contra las estrategias de desinformación y subversión antidemocrática entendidas como un retorno a la censura previa de los medios de comunicación. Por el contrario, el creciente esfuerzo de autorregulación y profesionalización del sistema de comunicación, de mayor opinión pública fundamentada en evidencia, de recomposición de la relación tripartita entre los medios de comunicación, el sistema político (Gobiernos, oposición) y la ciudadanía, y de perfeccionamiento del sistema político vigente.

En suma, una sociedad no será verdaderamente libre, republicana o democrática si no dispone de información veraz, precisa, transparente y bien fundamentada. El asunto es aún más urgente, ya que, en los numerosos países latinoamericanos han sido víctimas de masivas, intencionales y premeditadas estrategias de desinformación, principalmente en períodos electorales.

Las estrategias de desinformación y subversión son impulsadas en beneficio de algunos pocos intereses que repercuten en el conjunto de las relaciones entre los ciudadanos, la sociedad y el Estado. Por eso una ciudadanía digital se perfila como el mejor remedio contra la pandemia de la desinformación: esta se fundamenta en la veracidad (apertura, descentralización y neutralidad), en el pluralismo, en la diversidad, en la tolerancia a la crítica, en la democracia deliberativa (Gobierno abierto) y

Carlos Domínguez Avila

Investigador-colaborador del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Universidad de Brasilia (UnB). Doctor en Historia. Especializado en temas sobre calidad de la

